



Diódoro Carrasco Altamirano

Democracia bárbara o normalidad democrática

El inicio del segundo periodo de sesiones de la actual legislatura genera grandes expectativas en la opinión informada, por la posibilidad de discutir y procesar temas de interés público, como las reformas política, fiscal y laboral, entre otras iniciativas de cambio estratégico en la vida institucional del país.

Como se sabe, las diversas bancadas partidarias recién se reunieron en sus respectivos plenos para acordar sus agendas parlamentarias, y si bien hay algunas salidas de tono (como el escenario que declara desahuciada la reforma política), lo cierto es que el cuestionamiento social ha obligado a las dirigencias de los partidos a un compromiso público con las reformas, incluida la política.

Sin embargo, a nadie escapa que la suerte y el rumbo preciso de las reformas estarán determinados, a su vez, por lo que pase con las 12 gubernaturas que estarán disputándose en este año electoral, debido al peso que cada gubernatura tiene en sí misma, pero también por la manera como estos resultados influirán en los alineamientos y prospectivas rumbo al 2012.

En un contexto de victorias priistas en cadena, la noticia de las alianzas entre fuerzas políticas disímolas ha sonado como "balazo en catedral", despertando reacciones en el PRI, que van des-

de el desdén y la descalificación hasta una sobrerreacción, que se expresa ya no sólo en las habituales campañas de calumnias, denuncias y "filtraciones", sino llegando incluso a la agresión física, como le ocurrió al diputado federal panista Guillermo Zavaleta.

Y la pregunta que inevitablemente despierta estas manifestaciones de ira y desprecio es, ¿qué hay detrás de estas expresiones, además de la normal incertidumbre democrática que anticipan procesos electorales competidos, en las entidades donde las alianzas electorales se concreten?

Parecería que la molestia evidente y la desesperación frente a las alianzas electorales tienen como siguiente paso boicotear, y en última instancia reventar, los procesos mismos frente al riesgo de perder la elección, situación que, de concretarse, iría en sentido contrario a la aspiración social de vivir en condiciones de civilidad y de normalidad democrática.

En una democracia madura los dos temas: reformas y alianzas electorales, deberían correr por sus respectivos carriles, pero aquí ello todavía no acaba de ocurrir. Sobre la oportunidad, legitimidad, validez o pertinencia (o la falta de ellas) de las alianzas entre la izquierda democrática y la derecha liberal ya se ha dicho y escrito todo, o casi todo.

Lo único indiscutible es que las alianzas son perfectamente legales; su legitimidad es sin duda más discutible, pero quienes se alían encuentran una causa común en la necesidad de poner fin al autoritarismo y democratizar las instituciones de sus estados, y quien finalmente dará su veredicto inapelable será el electorado de cada entidad. A ello habría que atenerse y a las normas que nos hemos dado en materia electoral.

Así las cosas, ojalá al final se impongan la sensatez y la racionalidad política, cuestión que por lo que se ve no resulta simple, sino todo lo contrario, muy complicada —dados los intereses, proyecciones y recursos que están en juego—; sin embargo es plenamente posible si los intereses del país y de la sociedad se ponen por encima de los intereses particulares y cortoplacistas de las fuerzas políticas, en un año de reñidas elecciones locales.

Por eso, que nadie se llame a engaño: además de la preocupante suerte de las reformas legislativas de hondo calado, con lo trascendentes que son, lo que vivimos es un proceso definitorio, histórico me atrevería a decir, para el futuro inmediato. De las conductas y actitudes que aquí se den, de los resultados que se obtengan, dependerán en mucho las formas y costumbres más permanentes de la democracia mexicana. ■M



Ojalá al final se impongan la sensatez y la racionalidad política, cuestión que, por lo que se ve, no resulta simple, sino todo lo contrario, muy complicada; sin embargo es plenamente posible si los intereses del país y de la sociedad se ponen por encima de los intereses particulares y cortoplacistas de las fuerzas políticas

